En Logroño, a 27 de septiembre de 2017, el Consejo Consultivo de La Rioja, reunido en su sede, con asistencia de su Presidente, D. Joaquín Espert Pérez-Caballero, y de los Consejeros, D. José María Cid Monreal, D. Enrique de la Iglesia Palacios, D. José Luis Jiménez Losantos y D. Pedro María Prusén de Blas, así como del Letrado-Secretario General, D. Ignacio Granado Hijelmo, y siendo ponente D. Enrique de la Iglesia Palacios, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

49/17

Correspondiente a la consulta formulada por el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en relación con la *Revisión de oficio núm. 1/2017, de la inscripción fraudulenta (por falta de plantación previa), en el Registro riojano de Viñedo, de una superficie de 4,3490 Has. en la Parcela (P) X-A(no B), de Cenicero (La Rioja) y demás actos administrativos conexos (identificados en el apartado 6º de la Propuesta de resolución de 7 de abril de 2017), por la que se autorizó el arranque (ficticio) y la replantación de: i) 0,9983 Has, en la P.C; ii) 0,6300 Has, en la P.D; iii) 0,7060 Has, en la P.E; iv) 0,3203 Has, en las P.F y G; v) 0,42 Has, en las P. H y I; y vi) 0,6340 Has, en la P.X-J, todas ellas también de Cenicero (La Rioja), cuyos titulares catastrales son C.S.A. y los Sres. S, de segundo apellido M. (D. C. y J.M.), S. (Dª A.M. y Dª M.R.), V. (Dª M.T, Dª M.J. y D. C.) y V. (Dª V. y Dª M.J.); todo ello según hechos declarados probados por la Sentencia 14/2014, de 3 de febrero, de la Audiencia Provincial de La Rioja.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

El presente procedimiento de revisión de oficio núm. 1/2017 es reiteración del seguido en su día con el número 10/2015, tras haberse acordado la caducidad del mismo por Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de fecha 6 de febrero de 2017, no constando en el expediente su notificación a los interesados.

Posteriormente, por Resolución del mismo Consejero de fecha 9 de febrero de 2017, se acordó la iniciación de oficio de este procedimiento núm. 1/2017, lo cual fue comunicado a los interesados, por correo certificado con acuse de recibo, dándoles trámite de audiencia por diez días, constando en el expediente los escritos presentados por Dª A.M.S.S. y D. J.M.S.M, en su propio nombre y, además, como administrador de la mercantil C.S.A.

El expediente que se nos ha remitido es similar al de la Revisión de oficio núm. 10/2015, incluyendo, además de las Resoluciones anteriormente referidas, una nueva Propuesta de resolución, de fecha 7 de abril de 2017, y un, también nuevo, informe de los Servicios Jurídicos, de fecha 17 de julio de 2017. Ambos expedientes parten de lo establecido en el apartado Trigésimo Tercero de los hechos declarados como probados en la Sentencia ya referida, a cuyo tenor:

“-Se rehabilitan, por A, derechos de plantación legítimamente concedidos pero caducados y se introduce en el Registro de viñedos la finca de Cenicero: Polígono X, Parcela A (que en algunos documentos figura erróneamente como B) superficie 4,3490 Has, año de plantación 1950.

-En la escritura de adquisición de esta finca, otorgada con fecha 14 de noviembre 1962 del Notario de Haro D. I.L.A, por error material, se hizo constar como adquirida la Parcela B del Polígono X en Cenicero, número inexistente catastralmente y que, en realidad, es la Parcela A del mismo Polígono. Este error ha dado lugar a referirse a la misma finca como B, cuando se trataba de datos registrales, y como A, cuando lo eran catastrales. Así, según certificación del Ayuntamiento de Cenicero, la finca X/B no ha existido nunca correspondiéndose todas las menciones de esta a la A.

-La Parcela tenía una superficie de 5 Has, 28 a. 90 ca. En el año 1984 se le concedieron legalmente derechos de plantación, nombrándola B (al constar así en la escritura aunque, en realidad, era la A) por su superficie de 5 Has y 30 ca. Por diversas razones, no se realizó en su momento la plantación del viñedo autorizado.

-De esta finca, se segregó la Parcela X/K, de 94 as, colindante, por tanto, con la anterior originaria, que quedó reducida a 4 Has, la A y 94 a. la K, en total 5,2890 Has.

-Consta una declaración de arranque de la finca X/B (en realidad X/A), por una superficie de 5,34 Has. que fue sellada por el Sr. A. y firmada con fecha 2 abril de 1998.

-Constaba como arrancada la Parcela X/B (en realidad X/A), por su superficie de 5,2890 Has y, con los derechos que generó el arranque, se autorizaron las fincas X/L y X/A (segregada y originaria), con superficies respectivas de 94 as. y 4,3490 Has. en total exactamente la superficie arrancada 5,2890 Ha. El documento fue parcialmente rellenado por el Sr. A.

-En la copia de seguridad del Registro de Viñedo, de 1996, la finca X/A no aparece, en las copias de seguridad del Registro de Viñedo de 1997, no aparecen las fincas X/M y X/B.

-La Parcelas X-A y X-M fueron grabadas en el Registro de Viñedo en el año 1999.

-La Parcela X-A figura en el Catastro a nombre de A.M.S.S. y siete más.

-La Parcela X-M figura en el Catastro a nombre de A.M.S.S. y siete más.

-La Parcela X-K figura en el Catastro a nombre de C.S.A, sociedad de la que resultan ser socios las mismas personas anteriores.

-En acta de inspección fotográfica de 12 de agosto de 2002, la finca X-A de Cenicero está plantada de viña joven, cuya fecha de plantación puede circunscribirse dentro del entorno de los años 1998-1999.

-En acta de inspección fotográfica de 12 de agosto de 2002, la finca X-M de Cenicero está plantada de viña joven, cuya fecha de plantación puede circunscribirse dentro del entorno de los años 1998-1999.

-En acta de inspección fotográfica de 12 de agosto de 2002, la finca X-166 de Cenicero, está plantada de viña joven, cuya fecha de plantación puede circunscribirse dentro del entorno de los años 1998-1999.

-J.M.S.M, quien se encargaba de la tramitación de los documentos referidos a las fincas de la familia, acudió a la Consejería de Agricultura, donde contactó con el funcionario L.A, a quien presentó los documentos que tenía en su poder (fundamentalmente las autorizaciones legales para la plantación de las fincas X-M y X-B (en realidad X-A); los derechos otorgados con dichas autorizaciones habían caducado al no hacerse efectiva la plantación; L.A. se ofreció a resucitar los derechos, para lo cual introdujo dichas fincas en el Registro de Viñedo y confeccionó la declaración de arranque de las fincas X-M y X-B (que era realmente la finca X-A), rehabilitando con ello derechos de plantación.

-Con los derechos así rehabilitados por J.M.S.M, la familia S.M. logró plantar en las campañas 1998 y 1999 las fincas de su propiedad X-A; X-M y X-K.

-Con la introducción en el Registro de Viñedo de las fincas X-A (erróneamente designada en algunos documentos como X-B), X-M y X-K, se rehabilitaron derechos de replantación por una superficie de 11,9070 Ha.”

De lo expuesto, se colige que el presente expediente es un trasunto del nº 2/2017 seguido como consecuencia de la inscripción fraudulenta en el Registro riojano de Viñedo de una superficie de 6,6180 Has. en la Parcela M del Polígono X de Cenicero, que fue objeto de nuestro dictamen D.31/17; y que está igualmente relacionado con el expediente revisor nº 3/2017 en cuyo seno ha recaído nuestro dictamen D.47/17.

Segundo

1. La Propuesta de resolución de fecha 7 de abril de 2017, concluye que procede:

Primero.- Declarar nulos de pleno derecho todos y cada uno de los actos administrativos a los que se refiere el apartado Sexto de los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución, así como los asientos en el Registro de Viñedo a que dieron lugar, todo ello de acuerdo con la Sentencia previamente mencionada.

Segundo.- Declarar como viñedo plantado sin autorización e instar su arranque de una superficie de viñedo de 5,2890 Ha. de las Parcelas A y K del Polígono X de Cenicero, y avocar para sí la competencia para resolverlo que está reconocida al titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería en virtud del artículo 7.2.4 a) del Decreto 28/2015 de 21 de julio.

2. En cuanto a los actos administrativos a que se refiere el Fundamento de Derecho Sexto de la Propuesta de resolución, son los siguientes:

-Inscripción en el Registro de Viñedo la finca de Cenicero: Polígono X, Parcela A, superficie 4'3490 Ha, año de plantación 1950 a nombre de D. C.S.M. y Hnos. y sobrinas. Como queda acreditado en la Sentencia, en la citada Parcela nunca hubo viña.

-Inscripción en el Registro de Viñedo de los derechos de plantación generados por el "arranque" correspondientes a dicha finca. La utilización de los derechos ficticiamente generados se constata en el Registro de Viñedo (pp. 31-42 del expediente).

-Autorizaciones de plantación e inscripciones en el Registro de Viñedo correspondientes a favor de D. C.S.M. y Hnos. y sobrinas con los derechos procedentes de los arranques ficticios la finca X-A de Cenicero para las siguientes parcelas de destino: i) C de Cenicero por una superficie de 1,7160 Ha. (0,7177 Ha. provienen de un procedimiento de transferencia de derechos de plantación de cuya validez no se duda por lo que la autorización sería solamente nula por la diferencia, esto es 0,9983 Ha) de fecha 20 de mayo de 1999 (p. 1); ii) D de Cenicero por una superficie de 0,6300 Ha. de fecha 22 de octubre de 2001 (p. 2); iii) E de Cenicero por una superficie de 0,7060 Ha. de fecha 22 de octubre de 2001 (p. 3); iv) N y G de Cenicero por una superficie de 0,3203 de fecha 22 de octubre de 2001 (p. 4); v) H y I de Cenicero por una superficie de 0, 42 Ha. de fecha 15 de enero de 2002 (p. 5); y vi) X-J de Cenicero por una superficie de 0,6340 Ha. de fecha 15 de enero de 2002 (p. 6).

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito firmado, enviado y registrado de salida electrónicamente con fecha 20 de julio de 2017, y registrado de entrada en este Consejo el 21 de julio de 2017, el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, remitió al Consejo Consultivo de La Rioja, para dictamen, el expediente tramitado sobre el asunto referido.

Segundo

El Sr. Presidente del Consejo Consultivo de La Rioja, mediante escrito firmado, enviado y registrado de salida electrónicamente el 21 de julio de 2017, procedió, en nombre de dicho Consejo, a acusar recibo de la consulta, a declarar provisionalmente la misma bien efectuada, así como a apreciar la competencia del Consejo para evacuarla en forma de dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero señalado en el encabezamiento, la correspondiente ponencia quedó incluida, para debate y votación, en el orden del día de la sesión del Consejo Consultivo convocada para la fecha allí mismo indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Necesidad del Dictamen del Consejo Consultivo

El carácter preceptivo del dictamen del Consejo Consultivo en los supuestos de revisión de los actos administrativos resulta con toda claridad de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC'95), a cuyo tenor *“las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, podrán declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1”*. Reiteran la necesidad del dictamen del Consejo Consultivo en estos casos nuestra Ley reguladora [artículo 11.f)] y el Reglamento que la desarrolla [artículo 12.2.f)].

Por lo demás, como claramente se infiere del art. 106.1 LPAC'15, el dictamen del Consejo Consultivo en materia de revisión de actos administrativos es, además de preceptivo, habilitante de la ulterior decisión revisora de la Administración, al mantener la exigencia [también prevista en el art. 102.1 de la, en este caso concreto sustituida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPAC'92)], de que sólo puede declarar la nulidad del acto si dicho dictamen hubiere sido favorable, esto es, estimatorio de la nulidad denunciada.

Segundo

Sobre la nulidad de pleno derecho de los distintos actos identificados en el apartado 6º de la Propuesta de resolución de 7 de abril de 2017.

1. Reiterando lo que venimos indicando en casos muy similares al examinado, hemos de indicar que lo sometido a este Consejo en este expediente, viene siendo objeto de un amplio elenco de dictámenes (véanse, especialmente, los núms. D.11/01, D.26/01, D.3/03 y D.4/03, y, como más recientes, los D.57/14, y D.32/17) en los que se ha creado una doctrina legal que el expediente recoge en la Propuesta de resolución y que, a la vista de los hechos y documentos obrantes en el mismo, podemos anticipar ya, hemos de mantener en este, al no existir razón alguna para apartarnos de ella.

Como venimos indicando, el Derecho comunitario estableció, en su momento, unos límites imperativos a la facultad de plantación de viñedo que, en principio, corresponde a los propietarios de fincas rústicas (art. 348 Cc.) y también —de forma derivada— a los titulares de ciertos derechos reales de goce sobre las mismas, como el usufructo (cfr. art.

483 Cc.), o de derechos personales que comportan su posesión y disfrute, como los arrendamientos rústicos o la aparcería (cfr. arts. 1.1 y 28 de la Ley de Arrendamientos Rústicos -LAR-). Esos límites, y los mecanismos previstos como excepción a la facultad de plantar vides para la producción de vino, resultaban de lo establecido en determinados Reglamentos comunitarios, que son normas de aplicación directa e inmediata en los Estados miembros de la Unión Europea, los cuales, en su Derecho interno (en nuestro caso, tanto el estatal cuanto el autonómico), no pueden modificarlos, pero sí establecer las medidas adicionales que controlen y permitan su aplicación.

El Reglamento (CE) 1493/1999 establecía, como principal excepción a la prohibición de plantar vides, que resultaba de su art. 2.1, la titularidad de los llamados derechos de replantación, generados por el previo arranque, efectivo y total, de una superficie igual de vides, en otra parcela legalmente plantada con las mismas. Así resultaba —en el momento en que se redactaron los dictámenes citados de los años 2001 a 2003— de lo dispuesto en los arts. 4.2 y 7.1.d) del Reglamento (CE) 1493/1999, y normativa interna concordante, estatal y autonómica; y esto mismo es lo que se infiere hoy de lo que establecen los artículos 85 *bis* y 85 *ter* del Reglamento (CE) 1234/2007, en la redacción que procede del Reglamento (CE) 491/2009, del Consejo, tal y como hemos expuesto en los dictámenes antes expresados.

2. En el caso que nos ocupa, la inscripción en el Registro riojano de Viñedo —que reguló la Orden de la Consejería de Agricultura de la CAR núm. 1/1985, de 14 de enero— de una superficie de 4,3490 Has, en la Parcela X-A (B) del término municipal de Cenicero, fue fraudulenta pues está plenamente acreditado, según ha quedado expuesto en el Antecedente Primero, que, si bien se había concedido en el pasado autorización para plantar esa viña, tal autorización había caducado, de modo que esa Parcela nunca estuvo plantada de viña.

Igualmente, está acreditado que los derechos de replantación derivados del inexistente arranque de esa Parcela generaron, también, de manera absolutamente fraudulenta, mediante las manipulaciones efectuadas por el entonces funcionario de la Consejería, D. L.M.A, a solicitud de D. J.M.S.M. (quien venía actuando, con respecto a - entre otras- esa Parcela, a nombre de los copropietarios), y actuando ambos con plena consciencia del carácter fraudulento de los hechos debidos realizar para la “obtención” de esos derechos de replantación.

En definitiva, ningún “derecho de replantación”, procedente de un arranque efectivo, se pudo generar como consecuencia del inexistente arranque de la Parcela X-A de Cenicero, porque esta Parcela X-A nunca estuvo plantada de viña, de modo que los derechos que de ese inexistente arranque se derivaban resultaban ser ficticios.

Siendo ello así, los actos administrativos por los que se concedió autorización para plantar las Parcelas C, D, E, N y G, H y I, y X-J (en superficie equivalente a la que se fingió arrancada en la X-A), resultan ser nulos de pleno derecho.

Y es que, prescindiendo por completo del modo fraudulento en que se logró aparentar la previa inscripción de tal viña en el Registro de Plantaciones de Viñedo y su ulterior y ficticio arranque, declarado expresamente por la Sentencia de la Audiencia Provincial mencionada, resulta evidente la concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 47.1.f) LPAC'15, al haberse producido un acto, por el que los interesados adquirieron facultades o derechos —a través de la práctica del oportuno asiento en el Registro vitícola— faltando los presupuestos o requisitos esenciales para su adquisición: un viñedo existente e inscrito, su arranque efectivo y, en definitiva -como consecuencia de los dos elementos anteriores—, la preexistencia de los imprescindibles derechos de replantación, de cuya titularidad depende que la Administración reconozca la facultad de plantar y cultivar vides en otra finca rustica determinada; lo que —como expresa con acierto el art. 3 LAR— pasa a ser un derecho inherente a ella que, en consecuencia, no sólo puede ser ejercitado por quien sea su propietario, sino también por quien ostente un derecho real o personal en cuyo contenido, por disposición de la ley o por voluntad de las partes, la misma esté incluida.

Así pues, si —como en este expediente está acreditado— la Parcela de origen (la X-A) nunca fue plantada de viña, no hay viñedo que pudiera ser arrancado ni, en definitiva, derechos de replantación que de tal arranque puedan haber nacido. Por lo que, tanto las distintas Resoluciones que reconocieron estos derechos de plantación en las Parcelas C, D, E, N y G, H y I, y X-J, como los actos administrativos por los que se procedió a las inscripciones de esas Resoluciones en el Registro de Viñedos (en este caso, fraudulentos), son, sin duda alguna, nulos de pleno derecho.

3. Como hemos señalado en nuestro reciente dictamen D.32/17 —con remisión al D.43/14—, lo cierto es que las causas de nulidad apuntadas son reconducibles, en definitiva, al apartado f) del mismo artículo 47.1 LPAC'15, y concurren, con total independencia de que los derechos de replantación se hayan generado mediante actuaciones fraudulentas o delictivas, que, como se viene indicando, es justamente lo que resulta de la Sentencia penal firme dictada la Audiencia Provincial de La Rioja con fecha 3 de febrero de 2014; aunque, sin duda también, ha de llegarse a la misma conclusión por tener su origen los actos cuya revisión se propone con fundamento en una infracción penal y haberse producido los mismos como consecuencia de ésta [art. 47.1, d) LPAC'15].

Y es que, en efecto, los pronunciamientos contenidos en la Sentencia conducen a concluir que la causa de revisión contemplada por el art. 62.1, d) LPAC'15 concurre también, de modo inequívoco, atendiendo a sus hechos declarados probados.

Tales irregularidades, respecto del empleado público, son consideradas, según la Sentencia citada repetidamente, como constitutivas de un delito de falsedad documental (del art. 390- 1, 1º, 2º, 3º y 4º, del Código penal, CP), en concurso con los de cohecho (art. 419 CP) y prevaricación (art. 404 CP).

Es claro, por tanto, que los actos administrativos, a que se refiere la Propuesta de resolución sometida a dictamen, se dictaron "*como consecuencia*" de conductas que han sido calificadas como ilícitos penales. A través de esas conductas, se generó la apariencia de que existían los presupuestos de hecho esenciales (singularmente, la preexistencia de viñas inscritas y su arranque), que ulteriormente sirvieron de base fáctica, tanto a los actos de autorización de las plantaciones sustitutivas, cuanto a la inscripción en el Registro de Viñedos. En otros términos, sin aquellas conductas, los actos administrativos cuya revisión se pretende no habrían nacido a la vida jurídica.

Como es de ver, en casos como el que nos atañe, en los que un particular adquiere derechos o facultades careciendo de los presupuestos de hecho esenciales para ello y sirviéndose de la aportación o incorporación al procedimiento administrativo de datos falsos (siendo tal conducta ulteriormente declarada delictiva por Sentencia firme del orden penal), es perfectamente posible la concurrencia simultánea de las causas de revisión contempladas en el art. 47.1, apartados d) y f) de la LPAC'15. En tal sentido, resulta ilustrativo el Dictamen del Consejo de Estado de 10 de febrero de 2011 (Expediente núm. 2545/2010).

4. A lo hasta ahora indicado, en nada obstan a las conclusiones precedentes las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia por D^a A.M.S.S, y D. J.M.S.M, en su propio nombre y en representación de la mercantil C.S.A, precedentemente mencionadas.

A) En las efectuadas por la primera, es de mencionar que las circunstancias que puedan existir en las relaciones entre los distintos copropietarios –como así lo recoge la propia Propuesta de resolución- corresponden a la esfera interna de los copropietarios, sin que –al menos en este concreto caso- trascienda a la relación de aquella con la Administración; y que han de ser resueltas con arreglo a reglas correspondientes a la forma jurídica que la regule. Y, en cuanto a la solicitud de ser indemnizada por perjudicada, ello es objeto ajeno al procedimiento instado, y, además, no es momento para su examen, entre otras cuestiones porque uno de los requisitos para ello es la existencia de un daño “real, efectivo y evaluable económicamente”, lo que, es claro, todavía no se ha producido.

B) En cuanto a las efectuadas por D. J.M.S.M, tanto en su nombre como en el de C.S.A, hemos de especificar, al unísono con lo expuesto por la Propuesta de resolución que: **i)** el art. 47.1. LPAC'15, al establecer los supuestos de nulidad de pleno derecho, recoge, en su apdo. d), aquellos que constituyan infracción penal, lo cual es independiente de la participación del afectado en los hechos delictivos, siendo evidente la consideración

de infracción penal de las actuaciones tendentes a inscribir derechos de plantación en las diferentes Parcelas objeto del expediente y dictamen; y **ii)** el mismo artículo, en su apdo. f), mantiene la nulidad de los actos administrativos expresos, contrarios al ordenamiento jurídico, que permitan adquirir facultades o derechos, careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición.

En su argumentación, el alegante, con cierta apariencia de lógica, hace valer aquellos derechos de plantación (*sic*, nueva) que a sus Parcelas le fueron concedidos, para, con su apoyo, concluir sí la existencia de irregularidad, pero no con la fuerza que el ordenamiento jurídico otorga a la nulidad.

Pero no son esos los hechos desarrollados y ahora examinados: los derechos de nueva plantación que legítimamente poseía la Parcela X-A, caducaron y, precisamente, por el motivo concreto de que no se ejercitaron, **no se plantó la Parcela con vides**. Consecuencia de ello, e incluso *ab initio*, **nunca –con anterioridad a los hechos calificados como nullos- hubo vides plantadas en la Parcela**. Y es el propio alegante, quien, en connivencia con el funcionario de la Consejería sancionado penalmente, declara, **para obtener derecho a plantar vides en la Parcela de referencia, un previo arranque** que, por ello, se convierte en absolutamente **ficticio e ilegítimo**. Ello supone que es plena y totalmente aplicable la doctrina de este Consejo, recogida en la Propuesta de resolución a la que nos remitimos.

5. En relación con la Parcela “de destino” C, de Cenicero, la Resolución de la Consejería de Agricultura de 10 de septiembre de 2008 autorizó una plantación de viñedo en ella por superficie total de 17.160 m²; de ellos, 12.494 m² procedían de la Parcela X-A, según indica aquella Resolución (folio 1 del expediente); y 4.666 m² (46 as, 66 cas), de la Parcela O.

En el documento que recoge esa Resolución de 10 de septiembre de 2008, la cifra de “46 as, 66 cas” aparece tachada, y sustituida, a mano por la superficie de “71 as, 77 cas” (7.177 m²).

Cotejados esos datos con los que obran en el folio del Registro de Viñedo correspondiente a la Parcela “de destino”, C (folio 31 del expediente), se indica, como “*superficie solicitada*”, la autorizada el 10 de septiembre de 2008 (esto es, 17.160 m²; sin embargo, como “*derechos utilizados*”, consta una superficie superior, de 19.761 m².

Esta última cifra, 19.761 m², resulta de sumar la superficie (falsamente) procedente de la Parcela, 12.494 m², y la superficie de 7.177 m² que consta, a mano, en la Resolución de 10 de septiembre de 2008.

Pues bien, en el apartado Séptimo de la Propuesta de resolución (página 15, folio 237 del expediente), se explica que, de la Parcela C, de Cenicero, se pretende revisar de

oficio la autorización concedida, pero solamente en una superficie de “0,9983 Has”, que “es la resultante de detraer a la superficie total autorizada -1,7160 Has- (documento n° 1) la parte correspondiente a derechos válidos -0,7177 Has. (los derivados de la Parcela O)”.

Sin embargo, no parece que deba hacerse esa detracción, ya que: **i)** la superficie real sobre la que se utilizaron derechos fue de 19.761 m² (no solo de los 17.160 m² que figuran en la autorización de 10 de septiembre de 2008); **ii)** la autorización de 10 de septiembre de 2008 debe ser nula en toda la medida superficial (12.494 m²) procedente del inexistente arranque de la Parcela X-A; **iii)** de ese modo, la declaración de nulidad dejaría incólumes, como así efectivamente procede, los derechos a plantar los restantes 7.177 m², que, según la Consejería, proceden válidamente de la Parcela O.

Adicionalmente, el informe de campo sobre la Parcela C (folio 7 del expediente) señala que la superficie realmente plantada en esa Parcela C es incluso superior (22.831 m²), lo que parece indicar que, sobre esa Parcela, se han realizado plantaciones adicionales, ignorando este Consejo el título o razón por la que ello haya sido así, lo que, en cualquier caso, es cuestión ajena al presente dictamen, que, como se ha expuesto, se limita a analizar, en cuanto a la Parcela C, la procedencia de acordar la revisión de oficio de la Resolución de 10 de julio de 2008.

CONCLUSIONES

Única

Procede la revisión de los actos administrativos a que se refiere el procedimiento de revisión de oficio núm. 1/2017 (identificados en el apartado Sexto de la Propuesta de resolución de 7 de abril de 2017 obrante en el expediente objeto de este dictamen), por concurrir en ellos las causas de nulidad de pleno derecho comprendidas en los apartados d) y f) del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo común (LPAC'15).

Este es el Dictamen emitido por el Consejo Consultivo de La Rioja que, para su remisión conforme a lo establecido en el artículo 53.1 de su Reglamento, aprobado por Decreto 8/2002, de 24 de enero, expido en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

Joaquín Espert y Pérez-Caballero